Vestidos con uniformes carcelarios, bajo custodia armada y expuestos ante las cámaras, Nicolás y Cilia fueron trasladados a un Tribunal de Nueva York. Foto: foxnews.com

Entre la soberanía y la imposición

La agresión de Estados Unidos a Venezuela reveló una doctrina basada en la fuerza, el tutelaje político y el control de los recursos estratégicos, con profundas implicaciones para América Latina

Por YAILÉ BALLOQUI BONZÓN

EL autoproclamado "presidente de la paz", insistente aspirante a un Premio Nobel que nunca llegó, pasará a la historia como uno de los mandatarios más irresponsables y peligrosos para la estabilidad global, promovedor de políticas de confrontación que profundizan los conflictos, debilitan el multilateralismo y colocan a la Humanidad ante riesgos reales de escalada bélica, crisis humanitarias y retrocesos en todos los sentidos.

Bajo su autoría, el bombardeo de instalaciones militares en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda, con saldo de víctimas civiles, seguido del secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, marcó el 3 de enero de 2026 como una fecha de quiebre. No solo para la nación bolivariana, sino para el sistema internacional en su conjunto.

La operación fue breve en su ejecución y devastadora en sus consecuencias. Horas después, Donald Trump la presentó como una demostración de poder dirigida a China y, en segundo plano, a Rusia.

En el mismo gesto, se arrogó un rol de administrador imperial sobre Venezuela. No habló de transición ni de mediación internacional, más bien de control, permanencia y "día después". El mensaje fue inequívoco y deliberado.

No se trató de una reacción improvisada ni de un exceso táctico. Lo ocurrido en la madrugada del 3 de enero responde a una lógica cuidadosamente construida: la fuerza como doctrina y la soberanía como obstáculo. El secuestro de un jefe de Estado en pleno ejercicio del poder rompio un límite que incluso en las etapas más agresivas del intervencionismo hemisférico reciente había sido evitado. Washington reintrodujo sin disimulo prácticas que muchos creían superadas: la sustitución del derecho por la

imposición y del multilateralismo por la tutela.

Secuestro ante la “justicia del poder”

La gravedad del hecho quedó plenamente expuesta dos días después. El 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron presentados ante una corte federal en Nueva York, en una audiencia que confirmó que el objetivo del operativo no era jurídico, sino político.

Vestidos con uniformes carcelarios, bajo custodia armada y expuestos ante las cámaras, ambos fueron parte de una escenografía cuidadosamente diseñada para la humillación pública y el mensaje ejemplarizante.

Cuando el juez solicitó su identificación, Maduro respondió con una frase que condensó el sentido histórico del momento: “Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”. Se declaró inocente de todos los cargos y sostuvo que su comparecencia no podía entenderse como un proceso judicial ordinario, sino que era consecuencia directa de una agresión militar y un secuestro ejecutado por una potencia extranjera. No habló únicamente para el tribunal: habló para América Latina.

Horas después, desde el centro de detención donde permanece recluido, el presidente venezolano envió un mensaje al país a través de su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra. Pidió serenidad, unidad y firmeza; llamó a elevar oraciones por la paz y subrayó que su secuestro no debía convertirse en un factor de fractura interna. “Manténganse firmes, con dignidad y conciencia histórica”, fue el eje de un mensaje orientado a preservar el hilo de legitimidad entre el liderazgo político y la base popular, aun en condiciones de privación de libertad.

Lejos de debilitar la autoridad presidencial, la escena judicial reforzó una lectura política insoslayable: el conflicto dejó de ser discursivo y se convierte en una confrontación abierta entre soberanía y fuerza, con un jefe de Estado secuestrado que, incluso desde la prisión, se reivindica como tal.

Un Mensaje Anual a la Nación

Contra las expectativas de quienes apostaban por el colapso institucional, el Estado venezolano no se desintegró. Funcionó. Con el presidente secuestrado, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada y leyó el Mensaje Anual a la Nación, un acto atravesado por el impacto político y simbólico de la ausencia forzada del mandatario. Más allá de su contenido económico, ese mensaje cumplió una función central: demostrar continuidad de poder en condiciones de agresión externa.

Las decisiones anunciadas –reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, creación de fondos soberanos y estrategias para reactivar la industria petrolera sin ceder el control estatal– no deben leerse como simples medidas técnicas. Forman parte de una estrategia defensiva de Estado, orientada a ganar tiempo, evitar el caos interno y preservar el control de lo que realmente está en disputa: el petróleo venezolano.

Marco Rubio y la revancha contra Venezuela y Cuba

En paralelo, comenzó a despejarse el verdadero diseño político de la ofensiva. Detrás de la operación militar, del andamiaje judicial y del esquema de tutelaje emerge

Las agresiones aéreas que Estados Unidos lanzó el 3 de enero de 2026 alcanzaron objetivos civiles y militares en Caracas, La Guaira, el estado de Miranda y Aragua. Foto: europapress.es

una figura que no actúa como ejecutor circunstancial, sino que es arquitecto ideológico de la agresión: el secretario de Estado de Washington, Marco Rubio.

Su papel en la estrategia contra Venezuela no es nuevo ni improvisado. Responde a una obsesión política de larga data, en la que Caracas y La Habana son piezas inseparables de un mismo enemigo histórico. Rubio ha sido durante más de una década uno de los principales promotores de la línea dura contra Cuba, heredero directo del anticastrismo más visceral radicado en Miami.

Esa fijación se trasladó sin matices a Venezuela, extensión natural del "desafío cubano" en América Latina.

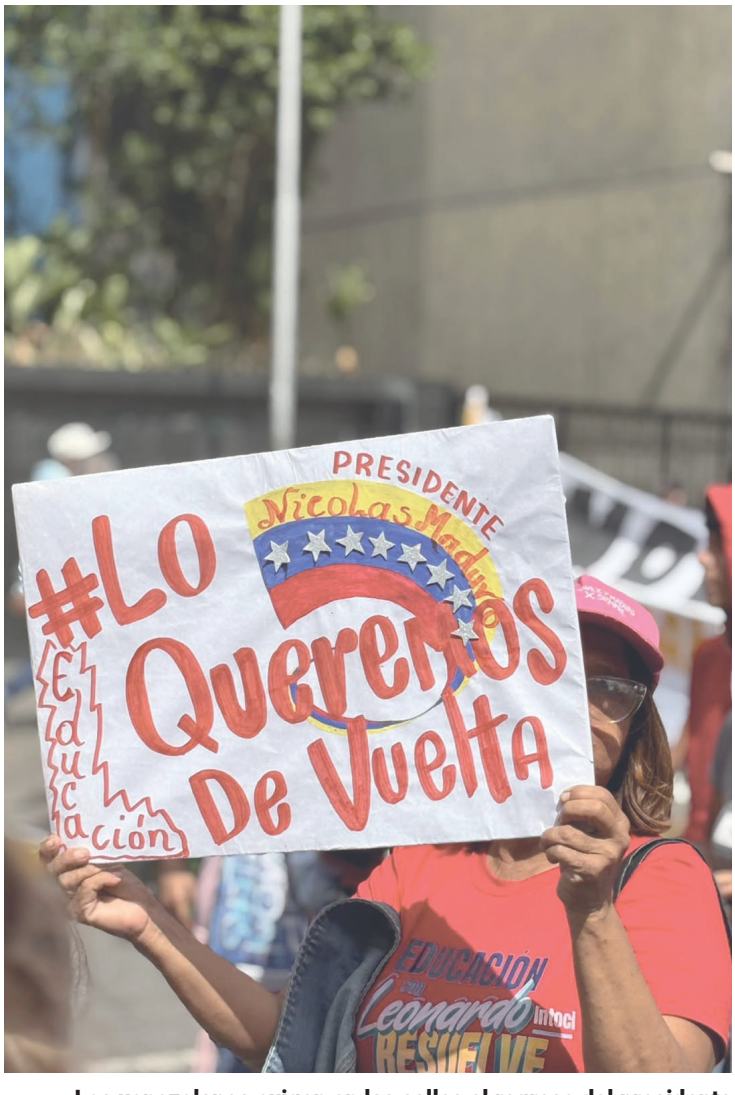
En esa lógica, derrotar a Caracas es condición necesaria para aislar y asfixiar definitivamente a La Habana. No es casual que, tras el secuestro de Maduro, Rubio compareciera ante el Senado y detalló una hoja de ruta basada en fases de estabilización, recuperación y transición, con el petróleo venezolano de eje estructurante. Tampoco es casual que reivindicara la "administración" de los recursos energéticos y celebrara la flexibilización del marco legal chavista. En su visión, la soberanía es un problema técnico que corregir y la autodeterminación una anomalía ideológica.

La obsesión de Rubio con Cuba explica el carácter ejemplarizante de la agresión. Venezuela no debía ser solo intervenida, debía ser castigada públicamente, convertida en advertencia regional.

El mensaje es doble y brutalmente coherente: ningún país que mantenga vínculos políticos, energéticos o simbólicos con La Habana puede sentirse a salvo.

Venezuela reclama a su presidente

Frente a esa ofensiva, la respuesta popular venezolana adquirió una dimensión que trasciende la coyuntura. Las marchas unitarias, las oraciones públicas y los mensajes de respaldo no son gestos emocionales aislados, constituyen actos de reafirmación política: la reconstrucción de legitimidad desde abajo cuando el orden internacional falla.



Los venezolanos exigen en las calles el regreso del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Foto: @pnbvzla

Las implicaciones son profundas. Si se normaliza el secuestro de un presidente, el bombardeo de una capital y la administración externa de recursos estratégicos, ningún país de América Latina queda a salvo. La soberanía deja de ser un principio jurídico y se convierte en una concesión condicionada. La Carta de las Naciones Unidas se vacía de contenido. El multilateralismo se revela una ficción frágil frente al uso abierto de la fuerza.

Venezuela es hoy el laboratorio. No por accidente, es porque reúne tres condiciones intolerables para la lógica imperial: recursos estratégicos, memoria histórica y voluntad de no obedecer. Mañana puede ser cualquier otro país que reúna esas características.

Cuando la fuerza sustituye al derecho, no se inaugura un nuevo orden. Se retorna al más antiguo. Y la historia latinoamericana sabe, quizá mejor que ninguna otra, cuánto cuesta ese regreso.